

## MUJERES PRODUCTORAS

GENERAN INGRESOS Y EMPLEO EN  
PROYECTOS SOCIALMENTE JUSTOS Y  
ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLES

(Pág. 2-4)

■ **Gobernaciones y municipios pueden otorgar recursos para emprendimientos productivos.**

(Pág. 5-7)

■ **La crisis del sector hidrocarburos es resultado de 17 años de una política enfocada en la renta.** (Pág. 8-15)

■ **CENSO: 7 hitos desde la actualización cartográfica hasta la presentación de resultados.** (Pág. 16-17)

■ **Alianza OCD: De la observación a procesos electorales a la vigilancia de la institucionalidad democrática.** (Pág. 18-19)

■ **Jóvenes líderes debaten sobre agua y cambio climático en la política internacional.** (Pág. 22-23)



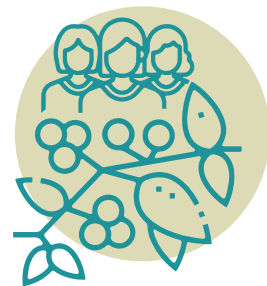


Sin agroquímicos,  
con disciplina en la  
entrega de alimentos,  
con innovación  
para promover el  
agroturismo y activas  
en las redes sociales,  
la Asociación de  
Mujeres Productoras  
de Hortalizas  
de Achocalla  
(AFLOPHA) es un  
ejemplo de proyecto  
socialmente justo  
y ecológicamente  
sostenible.



# MUJERES IMPULSAN EL AGROTURISMO

## COMO ALTERNATIVA SOCIALMENTE JUSTA Y ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE



Encarnación y Santusa Cuentas son jóvenes, líderes y emprendedoras. Tomaron sus herramientas hace más de una década y abonaron su proyecto de producción agroecológica.

"Es muy importante la alimentación sostenible para todos los consumidores, principalmente enfocar el tema de no utilizar agroquímicos en nuestros cultivos, es lo más importante para nosotras. Y generar conciencia en la sociedad y promocionar este sistema nuevo que estamos haciendo del agroturismo", explica Santusa.

¿Es rentable esta iniciativa productiva? Encarnación confirma que sí. "Implementar el turismo agroecológico nos permitió buscar y abrir nuevos circuitos de comercialización, directamente enfocando a la conciencia de la población".

Cuando planearon abrir la senda del agroturismo, las hermanas Cuentas consideraron que —si los consumidores de sus hortalizas visitaban sus parcelas y veían en terreno el trabajo de las productoras de alimentos, en contacto estrecho con la tierra y la cosecha— se generaría una alianza natural. Así nació en su organización, en marzo de 2019, el "Día de la Cosecha".

"Trajimos varios visitantes para que puedan ser parte de la cosecha y poder degustar algunos platos; en sí, ver toda la gama de productos que ofrece AFLOPHA. Seguimos en Semana Santa con un lleno total, más de 65 personas que vinieron a

visitar y ser parte de este encuentro. Para el Año Nuevo Aymara también hicimos y con esto tuvimos nuestra base de datos con los números de los nuevos clientes para hacer las ofertas de las bolsas AFLOPHA", recuerda Santusa.

A los clientes les pareció de muy buen gusto aquella idea de tomar de la tierra, con sus propias manos, los alimentos orgánicos que llegarían hasta sus casas. El resultado de esa experiencia fue la expansión de los clientes, los que siguieron aumentando cuando AFLOPHA promocionó su actividad agroecológica a través de redes sociales.

Con las ideas y proyectos que habían labrado, las productoras de Achocalla se destacaron por su empeño y se articularon con otras organizaciones para tener una red de clientes a quienes proveen el fruto de su trabajo. Empezaron con entregas quincenales en la plaza de San Pedro de La Paz y se fueron expandiendo.

"También abastecemos a algunos supermercados. Actualmente ya estamos empezando a proveer hortalizas y eso nos ha beneficiado bastante, poder hacernos conocer por redes sociales y aprovechar todas esas tecnologías que se han ido innovando", dice Encarnación.

La iniciativa de promover el agroturismo, que había nacido como un proyecto de universidad, se complementó con intercambio de experiencias entre productores de Cochabamba y de los Yungas de La Paz.





## DELIVERY CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS

El camino ha tenido espinas. Durante la crisis política de 2019, cargadas de sus productos, tuvieron que recorrer a pie largas distancias y evadir bloqueos y enfrentamientos para cumplir con las entregas de las bolsas con alimentos ecológicos.

Un año después, la pandemia por el coronavirus, y la consecuente cuarentena puso a la organización en riesgo de perder contacto con los clientes; pero la amenaza maduró como oportunidad cuando surgió la idea de incluir el servicio de delivery (entregas a domicilio).

"Entonces dijimos, nosotros queremos que ustedes se cuiden. Vamos a hacer la entrega directamente a sus casas. Antes de la pandemia, solamente entregábamos como 25 bolsas, nada más. Pero para la etapa de la pandemia pusimos la lista de productos en nuestro grupo (de whatsapp) y las caseritas

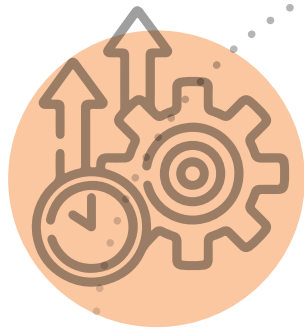
empezaron a compartir en todos sus grupos, y ahí empezó el trabajo".

Encarnación cuenta que fueron creciendo hasta llegar a 300 pedidos por semana. No tenían vehículo propio y tuvieron que contratar transporte para atender la demanda en las zonas Central, Sur, Miraflores, Sopocachi y Ciudad Satélite.

"Con el tiempo se ha ido normalizando, la gente ya está yendo a los mercados, está volviendo a tener la vida que tenía antes. Los clientes han reducido en estas temporadas, pero, con la nueva ola, imagino que irá aumentando por el tema de cuidarse a uno mismo y a sus familiares".

La idea que sembraron Santusa y Encarnación, para generar sus propias fuentes de trabajo, motivada en proteger el medio ambiente y la salud de los consumidores de alimentos, ha caído en tierra fértil.





# GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS pueden otorgar recursos para EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

Una de las principales limitaciones de la gestión pública, principalmente subnacional, ha sido la reducida inversión en temas productivos y falta de impulso al desarrollo económico y a la generación de empleo. Las Transferencias Público Privadas son un mecanismo que permite a las instancias de gobierno, como gobernaciones y municipios, asignar recursos públicos a objetivos de desarrollo, de modo que organizaciones productivas puedan acceder a fuentes de financiamiento.

Las Transferencias Público Privadas (TPP) son un mecanismo para impulsar la producción y el desarrollo. Esta forma de financiamiento para los productores está aprobada por normas legales, principalmente desde la vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 2010.

Las TPP han sido poco utilizadas por diferentes factores, como el desconocimiento por parte de instancias públicas y de los actores sociales, y por los cambios normativos, entre otros elementos.

Si bien los gobiernos municipales y departamentales tienen entre sus responsabilidades el desarrollo productivo, en la práctica, han tenido limitaciones claras para cumplir con esta atribución, no solamente en el periodo de la pasada bonanza económica, a pesar de haber contado con importantes recursos, sino desde el inicio del proceso de descentralización de los años '90.







Pese a reiteradas recomendaciones de instituciones de sociedad civil para que una parte de los excedentes económicos que el Estado administró en el periodo de la bonanza sean orientados a potenciar la producción nacional, los distintos niveles de gobierno dejaron pasar la oportunidad de esa política que hubiese sido estratégica.

Si bien las Transferencias Público Privadas se pueden utilizar para diferentes fines, el énfasis que le da la normativa, está orientado principalmente a asignaciones para emprendimientos productivos.

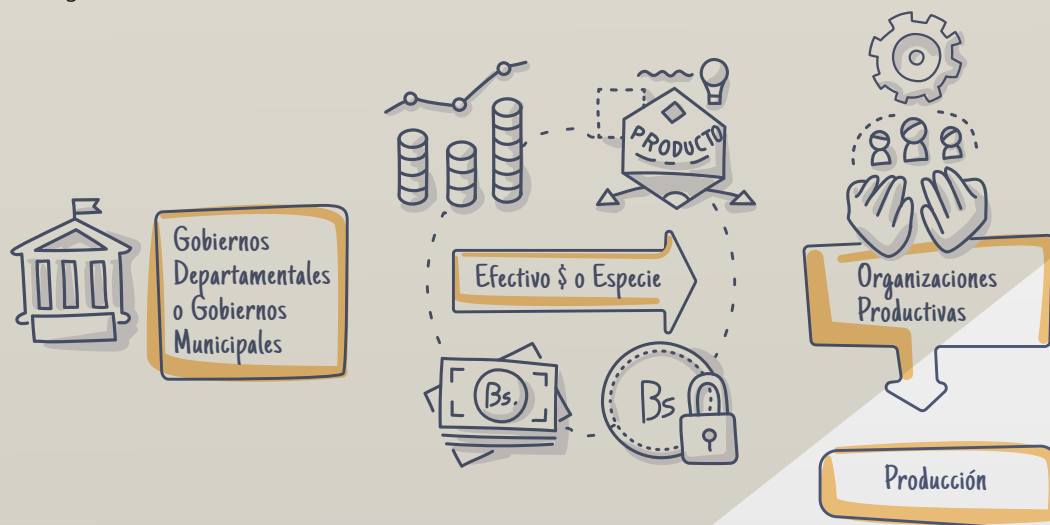
Las TPP, bien utilizadas, son un mecanismo alternativo viable que puede contribuir a que se orienten recursos públicos para que organizaciones productivas puedan acceder a financiamiento y a partir de este apoyo, puedan generar ingresos.


Esto toma relevancia, más aún en el contexto económico complejo por el que atraviesa el país, que demanda respuestas y acciones para generar y preservar el empleo, y para impulsar las economías locales y regionales. No obstante, el fomento a la producción dependerá también de las políticas y condiciones macroeconómicas que el Gobierno central debiera garantizar.

Las Transferencias Público Privadas son mecanismos que involucran a dos partes, por un lado, la entidad otorgante, como puede ser una gobernación o un gobierno municipal, y, por otro lado, la organización beneficiaria. Ambas partes requieren cumplir determinados procedimientos y requisitos, normativos y técnicos, para activar y aplicar este mecanismo.

Las entidades otorgantes deben aprobar un reglamento de Transferencias Público Privadas; autorizar las transferencias específicas, lo que conlleva elaborar y aprobar un convenio de financiamiento; y asignar (inscribir) el presupuesto correspondiente.

En el caso de las organizaciones beneficiarias de las Transferencias Público Privadas, en principio, estas deben contar con personería jurídica. Los requisitos específicos que las organizaciones deben cumplir para acceder a recursos a través de este mecanismo deben ser definidos en los reglamentos de la entidad otorgante, como ser: presentar su solicitud/propuesta en un plan de negocios (o en otro formato específico), comprometer una contraparte, etc.



The background of the page is composed of several overlapping geometric shapes in shades of light green, yellow, and white. In the top-left corner, there is a photograph of a traditional woven basket, likely made of reeds or similar natural materials, with a yellow interior lining.

En el mediano plazo, las Transferencias Público Privadas se podrían constituir en un mecanismo para que los gobiernos municipales puedan identificar la potencialidad productiva de sus regiones y las organizaciones productivas que trabajan en estos sectores, para que estas últimas, con el apoyo de recursos públicos, puedan dinamizar las economías locales, el empleo y las oportunidades de generar ingresos.

Asimismo, en perspectiva, es estratégico que este tipo de mecanismos pueda ser ampliado a otro tipo de unidades productivas (más allá de las organizaciones productivas), como ser las micro y pequeñas empresas, actores fundamentales para el desarrollo productivo, la generación empleo e ingresos para la población.

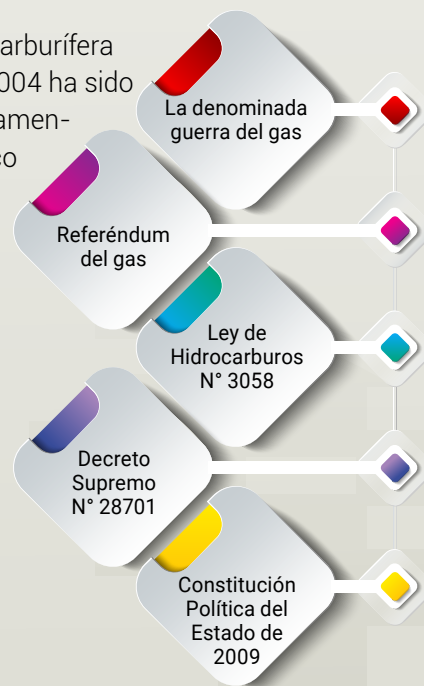
Fundación Jubileo se ha planteado la tarea de contribuir a promover y orientar las Transferencias Público Privadas, con la finalidad de que se constituyan en un mecanismo que, como señala la norma, puedan impulsar la actividad productiva, elemento fundamental para un verdadero desarrollo. Para este efecto, puso a disposición de organizaciones, gobiernos subnacionales y población en general, diferentes herramientas como cartillas, guías orientadoras y de información y capacitación en el sitio web [www.jubileobolivia.org.bo](http://www.jubileobolivia.org.bo)



# LA CRISIS DEL SECTOR **HIDROCARBUROS** **ES RESULTADO DE 17 AÑOS** DE UNA POLÍTICA ENFOCADA EN LA RENTA

La incursión del sector hidrocarburífero en Bolivia data del siglo XVIII, cuando se dieron las primeras concesiones de hectáreas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Posteriormente, en el siglo XX, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1936, la que cumplió diferentes roles de acuerdo con las leyes que fueron surgiendo en el sector. Sin embargo, en la historia de la industria hidrocarburífera se destaca como un hecho trascendente todo el proceso para lograr la firma del contrato para la exportación de gas a Brasil, ya que durante esos años las inversiones en exploración y explotación por parte de las empresas petroleras llegaron a más de 600 millones de dólares y, fruto de ello, las reservas hidrocarburíferas se incrementaron y garantizaron una producción de los hidrocarburos bolivianos a largo plazo.

La política hidrocarburífera aplicada desde 2004 ha sido establecida fundamentalmente por cinco elementos:



La Constitución Política del Estado de 2009 estableció los lineamientos para el desarrollo del sector hidrocarburífero, muchos de los cuales no han podido ser completamente implementados por la ausencia de una nueva ley sectorial acorde con la norma constitucional.

Tanto la denominada “guerra del gas” como el “referéndum nacional del gas” tuvieron la virtud de considerar a este energético como un recurso estratégico; sin embargo, su principal debilidad fue enfocarse solamente en la captura estatal de la renta hidrocarburífera y el centralismo de YPFB como actor principal en el sector, descuidando así el definir el uso que se iba a dar a





esos recursos para no incurrir en una dependencia sobre los mismos y una política de fortalecimiento institucional del sector ante las débiles capacidades administrativas, humanas y financieras que se tenían en ese momento.

Ambos hechos se basaron principalmente en demandas de movimientos sociales que, en muchos casos, eran muy lejanos y con poco conocimiento de la dinámica del sector hidrocarburos en la región y el mundo; pero, además, con muy poca apertura a dialogar con quienes tenían conocimiento del sector.

En contraposición, quienes conocían a mayor profundidad los vaivenes de esta industria, ya sean actores políticos o analistas independientes, sin bien realizaron advertencias de las posibles consecuencias que esto podría tener para el sector y el país en el corto plazo, no tuvieron la capacidad de construir procesos de capacitación y diálogo que demostrara con argumentos los efectos que varias propuestas podrían tener en el largo plazo; fue así que los distintos actores sociales, políticos, analistas y sociedad civil vieron en el Referéndum de 2004 la solución al problema, omitiendo que en la mayoría de los casos el voto sería poco informado y apoyado más en un enfoque ideológico que sectorial.

Una vez realizado el "Referéndum del Gas", el año 2004, el Congreso Nacional promulgó, el 17 de mayo de 2005, la Ley de Hidrocarburos N° 3058 que abrogó la antigua Ley N° 1689 y recogió los lineamientos de política hidrocarburífera establecidos en el referén-

dum, creando un nuevo régimen contractual basado en tres tipos de contratos para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estableció la refundación de YPF para que pueda participar en toda la cadena hidrocarburífera, así como la recuperación de las empresas que habían sido privatizadas y, probablemente, la principal medida que estableció fue la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH<sup>1</sup>) con una alícuota de 32% que –sumada a la regalía departamental de 11%, regalía nacional compensatoria de 1% y participación del TGN del 6% que existían ya en la anterior ley sectorial– permitían al Estado quedarse con al menos 50% de los ingresos por la explotación de hidrocarburos, tal y como lo establecía la pregunta 5 del referéndum realizado el año 2004 que, a su vez, daba respuesta a la demanda de amplios grupos de la sociedad.

La determinación de este nuevo régimen fiscal fue ampliamente observada por analistas del sector que vislumbraron consecuencias negativas en cuanto a las inversiones futuras por parte de las empresas petroleras, debido a que el 50% se aplicaba a

<sup>1</sup> Es importante mencionar que la ley estableció que el IDH se calculaba igual que las regalías, por lo que no podía ser acreditado contra el Impuesto a las Utilidades que pagaban las empresas petroleras.

los ingresos luego de descontar los costos de transporte y compresión, y no tomaba en cuenta factores tales como el precio de venta, la cantidad vendida, las características del campo o la etapa en la que se encontraba un determinado proyecto.

Así, durante el 2005, el Gobierno de entonces empezó a promulgar los diferentes reglamentos a la flamante Ley de Hidrocarburos para lograr su implementación; sin embargo, en pleno proceso, el 1 de mayo de 2006, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 28701 llamado “de Nacionalización” que vino a profundizar la política hidrocarburífera con enfoque nacionalista y de captura de renta que ya se había iniciado con la Ley de Hidrocarburos N° 3058.

El citado decreto estableció, entre otras cosas, que la empresa petrolera estatal YPFB asumía el control y dirección de todas las actividades hidrocarburíferas; la obligación por parte de las empresas petroleras que operaban en el país de entregar en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos, y dio un plazo de 180 días para la renegociación de nuevos contratos con todas las empresas petroleras que operaban en Bolivia y la refundación de YPFB convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social.

Es importante mencionar que, en los Contratos de Operación para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, además del régimen fiscal establecido en la Ley de Hidrocarburos N° 3058, se incluyó una participación directa a favor de YPFB en las ganancias de esos contratos.

Posteriormente, el año 2009 se promulgó una nueva Constitución Política del Estado que estableció diferentes lineamientos para la gestión de los recursos hidrocarburíferos, que incluía varios preceptos acordes con la Ley de Hidrocarburos N° 3058 y el Decreto N° 28701, y adicionó otros como la industrialización, la necesidad de un ente autárquico que fiscalice todas las actividades de la cadena hidrocarburífera, el tipo de contrato petrolero de servicios y la posibilidad de asociación por parte de YPFB para todas las actividades con un porcentaje accionario no menor a 51%, entre otros. A partir de este cambio estructural en la ley de leyes surgió la necesidad de desarrollar un marco normativo para el sector conforme a lo dispuesto en la nueva Constitución, y aunque hubo algunos intentos por socializar un proyecto de norma sectorial, está no llegó a promulgarse y, desde ese momento, se generó un desfase entre la ley sectorial y el marco constitucional que ha intentado ser cubierto por normas de menor jerarquía, como decretos supremos y resoluciones ministeriales, que solo generaron desorden e inseguridad jurídica en un sector que se caracteriza por ser de largo plazo.







Adicionalmente, como parte de los intentos dispersos del gobierno de turno para avanzar en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, desde el año 2007, mediante diferentes decretos supremos, el Poder Ejecutivo fue reservando áreas a favor de YPF para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, llegando a sumar 100 áreas hasta el año 2017; sin embargo, durante ese periodo, el seguimiento y control al progreso de estas actividades en dichas áreas, así como la adopción de políticas correctivas, fue sumamente débil. Asimismo, es importante mencionar que 15 de las 100 áreas están sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas, aspecto que dio paso a que en mayo de 2015 el Poder Ejecutivo emitiera el Decreto Supremo N° 2366 autorizando el desarrollo de actividades de exploración en áreas protegidas, lo cual resultó totalmente contradictorio con el discurso del cuidado de la madre tierra y probablemente buscaba ser una respuesta desesperada a la casi nula reposición de reservas que hubo luego de 10 años de explotación de los principales campos productores.

Para el año 2015 ya se advertían los efectos de la poca o casi nula actividad exploratoria como resultado de un régimen fiscal que no incentivaba la inversión extranjera ni nacional, por lo que en diciembre de esa gestión, y con el objetivo de incentivar las actividades de exploración y explotación, el Gobierno promulgó la Ley N° 767 mediante la cual creó un Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), financiado con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, determinado antes de su distribución a los diferentes beneficiarios de esos recursos. Con esa medida se pretendió devolver una porción del IDH a las empresas petroleras como un incentivo a la inversión.

El resultado de esta iniciativa fue que algunas empresas petroleras continuaron invirtiendo en el desarrollo de campos que ya estaban en producción; sin embargo, existieron nulos resultados de la actividad exploratoria. Lo que sí se tuvo con la aplicación de la Ley N° 767 fue la confiscación de recursos por concepto de IDH, tanto a gobernaciones como municipios, que bien pudieron haber sido destinados para el sector salud o la diversificación económica.



### IMPACTOS DEL DETERIORO EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Luego de ser promulgado el llamado Decreto de Nacionalización, en mayo de 2006, la agenda sectorial estuvo orientada a la negociación de los nuevos contratos para las actividades de exploración y explotación en el plazo que establecía la citada norma. Si bien estos contratos fueron suscritos en octubre de 2006, fueron protocolizados y entraron en vigencia recién el 2 de mayo de 2007 y los Acuerdos de Entrega y Procedimientos de Pago que eran complementarios a los mismos fueron suscritos entre YPFB y las empresas petroleras el año 2010, con los consiguientes efectos en seguridad y atracción de inversiones que resultaban de realizar pagos parciales por costos y utilidades a las empresas sujetos a ser completados cuando puedan esta-

blecerse los procesos administrativos de control y auditoria de costos, y cálculos de la retribución del titular al interior de YPFB.

Un tema hasta ahora pendiente para la consolidación de los contratos suscritos el 2006 es la definición del Anexo G donde se debían establecer las inversiones que debían ser devueltas por YPFB a las empresas petroleras al momento de empezar el referido contrato.

Simultáneamente, el Gobierno intentaba refundar YPFB como actor principal dentro de toda la cadena hidrocarburífera en Bolivia y, además, posicionarla –al menos discursivamente– al nivel de otras empresas internacionales como Petrobras de Brasil, quitándole para ello todo tipo de trabas burocráticas y administrativas para sus compras y contrataciones. Así, durante el periodo 2006–2009 se tuvieron cinco presidentes ejecutivos interinos en la estatal petrolera, lo cual hizo prácticamente imposible esperar una reestructuración seria con un enfoque empresarial.

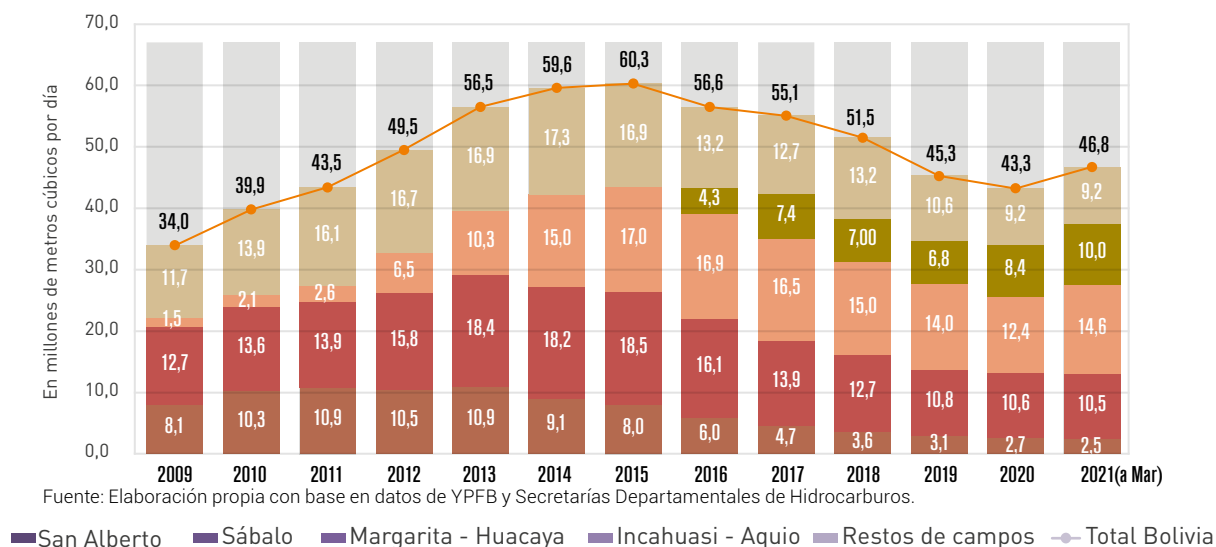
Posteriormente, en el periodo 2010–2020, la empresa petrolera estatal tuvo siete presidentes ejecutivos, interinos, siendo que la mayoría tampoco contaba con la experiencia en el sector requerida





## Producción promedio diaria de gas natural

En millones de metros cúbicos



por la norma<sup>2</sup>. Todos anunciaron reestructuraciones que no se concretaron en un cambio efectivo en la empresa retrasando el trabajo efectivo de la estatal petrolera; por el contrario, durante este periodo existieron serias denuncias de corrupción, incremento de personal, duplicidad de roles con otras instituciones del sector e incapacidad de consolidar una empresa petrolera enfocada a las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos.

Entonces, mientras las autoridades públicas a cargo del sector hidrocarburos se enfocaban en una agenda administrativa y política, descuidando la visión estratégica del sector, el país se beneficiaba de un flujo inédito de ingresos fiscales debido al incremento en los precios internacionales del barril de petróleo entre los años 2004 y 2014, así como de un aumento en la producción de hidrocarburos de 50% a partir de la gestión 2010 hasta 2015, basado fundamentalmente en la explotación acelerada de los megacampos que habían sido descubiertos décadas atrás; seguida de una caída constante desde el año 2016, debido a la declinación de dos megacampos, así como por la falta de actividad exploratoria que permita descubrir nuevos reservorios hidrocarburíferos.

Adicionalmente, considerando que, en Bolivia, generalmente el gas natural explotado trae asociado líquido condensado, la caída en la producción de este energético implica también una significativa reducción en la producción de hidrocarburos líquidos, lo que ya venía siendo alarmante por la disminución de producción de petróleo crudo desde hace más de una década. Esta situación se traduce en una mayor importación de gasolina natural y diésel que afecta las finanzas públicas del nivel nacional y contribuye a mantener la dependencia de las energías fósiles en el parque automotor.

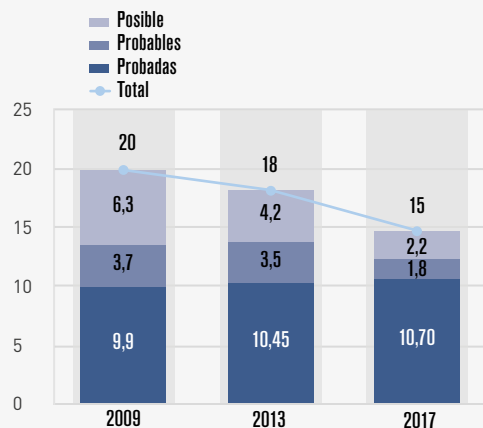
La producción de hidrocarburos en Bolivia viene cayendo de manera permanente año tras año, situación que fue advertida al menos hace una década y es resultado de la poca actividad exploratoria; por lo tanto, las normas que dotaron de 100 áreas reservadas a YPFB para la exploración y explotación de hidrocarburos, la apertura para ejecutarlas en parques naturales y áreas protegidas, los incentivos creados a partir del IDH y las decenas de acuerdos de entendimiento suscritos por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB con diferentes empresas petroleras internacionales no pudieron plasmarse en un incremento efectivo de las inversiones en actividades exploratorias en el país, lo que se refleja en una tendencia decreciente en las reservas, tanto de gas natural como de hidrocarburos líquidos, incluso

<sup>2</sup> Ser profesional de probada experiencia no menor a 10 años y tener reconocida capacidad ejecutiva. Decreto Supremo N° 28324.

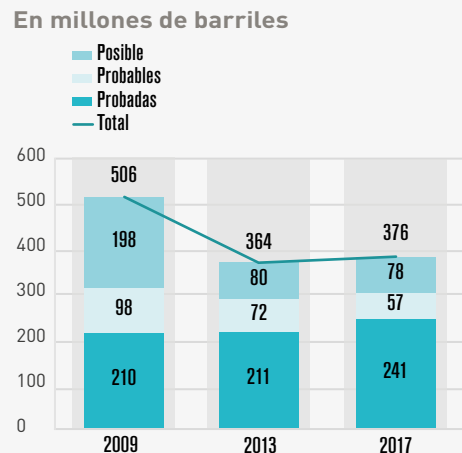
considerando que el campo Incahuasi –que fue descubierto el 2004– es el único campo nuevo que ingresó en producción durante los últimos 16 años.

Con relación a las reservas hidrocarburíferas del país, es importante resaltar que, a pesar de que la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos N° 3740 establece, en su artículo 7, que YPFB debe publicar hasta el 31 de marzo de cada año la certificación de las reservas hidrocarburíferas existentes hasta el 1 de enero de cada año, esta disposición ha sido sistemáticamente incumplida por las diferentes autoridades que estuvieron a la cabeza de YPFB, siendo que el país solo cuenta con certificaciones para las gestiones 2009, 2013 y 2017; además, el último informe de certificación no fue publicado oficialmente por YPFB. Considerando estas últimas tres certificaciones, como se aprecia en el gráfico, se constata la tendencia decreciente de las reservas certificadas de hidrocarburos, aspecto que se constituye en una importante alerta sobre la seguridad energética nacional, así como de la sostenibilidad de ingresos fiscales en el mediano plazo.

**Certificación de Reservas de Gas Natural**  
En TCF



**Certificación de Reservas Hidrocarburos Líquidos**  
En millones de barriles



Fuente: Elaboración propia con base en datos de YPFB

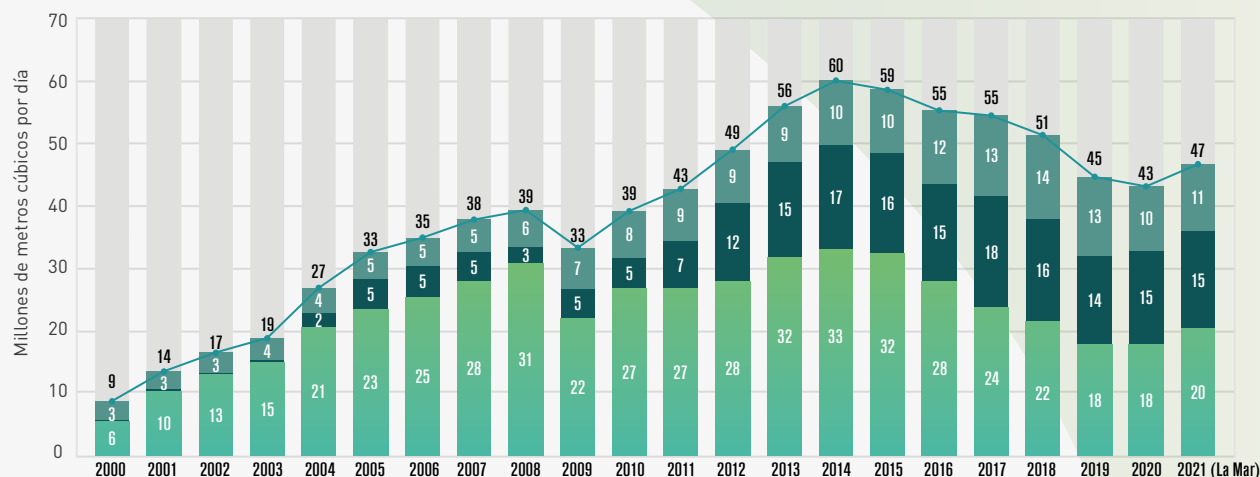
## DESAFÍOS DE LA POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA

Luego de 16 años de la implementación de la política hidrocarburífera definida fundamentalmente por la Ley de Hidrocarburos N° 3058 y el Decreto Supremo N° 28701, así como por los fallidos intentos para una refundación de YPFB; los resultados son evidentes: existe un rezago de al menos una década en la actividad exploratoria, la producción de hidrocarburos viene cayendo desde 2016 y, por lo tanto (ver gráfico) también están disminuyendo los volúmenes comercializados a los únicos dos mercados de exportación de gas natural que tiene el país, como son Brasil y Argentina. Probablemente la excepción es el mercado interno que muestra una tendencia creciente, pero que tiene un precio subvencionado.



## Comercialización promedio diaria de gas natural

### En millones de metros cúbicos diarios



Fuente: Elaboración propia con base en datos de YPFB y Secretarías Departamentales de Hidrocarburos.

Un aspecto preocupante e inédito en los últimos 20 años ha sido que, como resultado de la caída constante en la producción de gas natural y la falta de actividad exploratoria, el país venía incurriendo en el pago de multas por incumplimiento a los compromisos de exportación, tanto a Brasil como a Argentina, desde el año 2016, lo que ha resultado en la necesidad de renegociar los contratos de exportación con ambos países en el año 2020.

En este sentido, en marzo de 2020 se suscribió una adenda para el periodo de cierre del contrato de exportación de gas natural a Brasil y, en diciembre de ese mismo año, el actual Gobierno renegó también el contrato de exportación de gas natural a Argentina mediante una quinta adenda. Es importante destacar que, mediante la firma de ambas adendas, el país se ha visto obligado a readecuar sus compromisos de exportación a la capacidad real de producción de gas natural; es decir, existe un problema principalmente de oferta y no así de demanda.

Por otra parte, el consumo de gas natural en el mercado interno ha venido creciendo significativamente durante la última década, siendo que la generación de electricidad es uno de los principales consumidores, por lo que también debe ser considerado al momento de establecer estrategias y políticas del sector hidrocarburos. Considerando que 71% de la energía eléctrica que consume el país es generada a partir de termoeléctricas, resulta necesario reflexionar la política de subvenciones y los precios al mercado interno, así como la necesidad de diversificar la matriz del sector eléctrico en el país, impulsando con mayor fuerza las energías alternativas.

Finalmente, el sector hidrocarburos, y particularmente las actividades de exploración y explotación, lejos de avanzar en materia de transparencia y acceso a información, han registrado importantes retrocesos desde el año 2014, cuando YPFB dejó de generar reportes trimestrales, se eliminó información de comercialización de hidrocarburos y los datos de producción, precios y regalías quedaron congelados hasta ese periodo en la página web de la empresa petrolera estatal. Si bien el año 2020 existió un intento de transparentar información y brindar acceso público a los datos del sector por parte de YPFB, esto quedó nuevamente en un mero ejercicio ya que, a pesar de ser uno de los principios de la política hidrocarburífera establecida en la Ley de Hidrocarburos N° 3058, continúa dependiendo de la buena voluntad de las autoridades a cargo.

El sector hidrocarburos en Bolivia atraviesa por uno de los momentos más delicados de los últimos 20 años, por lo que resulta urgente definir una nueva política sectorial que defina aspectos ambientales y condiciones previas para la actividad hidrocarburífera, estructura y roles institucionales claros para las diferentes instancias públicas del sector hidrocarburos (Ministerio, YPFB, ANH y EBIH), un nuevo marco contractual para las actividades de exploración y explotación, un régimen fiscal basado en escalas móviles en función de variables como precio, tipo de campo y escala de producción, y promueva el uso de los excedentes económicos exclusivamente para la diversificación y desarrollo económico.



# EL CENSO TENDRÁ 7 HITOS DESDE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA HASTA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El 16 de noviembre de 2022, los habitantes del país abrirán las puertas de sus hogares para responder las preguntas del Censo Nacional de Población y Vivienda, resultado que deberá ser la guía para definir políticas públicas y planificar el desarrollo.

Una vez expresada la voluntad política del Gobierno para su realización, el proceso del Censo tiene al menos siete hitos de los que depende obtener información precisa, confiable, completa y oportuna, sobre cuántos somos, cómo vivimos, dónde estamos y qué necesidades tenemos.

Para ese propósito, estos hitos son i) la actualización cartográfica, ii) la elaboración de la boleta, iii) la capacitación de los empadronadores, iv) la promoción y sensibilización para la participación responsable de la población, v) la realización del operativo censal, vi) el procesamiento de datos y vii) la presentación de resultados.

1

La **actualización cartográfica** es una de las primeras y más importantes tareas para garantizar la cobertura total de hogares que serán encuestados. Se trata de un arduo y más largo trabajo técnico. Una omisión de familias que queden fuera del censo podría influir en la imprecisión de resultados. Una adecuada cartografía permitirá abarcar todas las regiones urbanas y rurales del país.

La **elaboración de la boleta** es otra de las tareas relevantes para definir un listado de preguntas pertinentes y necesarias para el propósito principal. Requiere de un cuidadoso mecanismo de selección de temas e incluso precisión y claridad para la redacción de las preguntas.

2

3

Luego del reclutamiento del personal que hará el levantamiento de la información se requerirá un proceso de **capacitación** para que los empadronadores lleguen a cada lugar asignado, y sean eficaces en su contacto con las personas al levantar la información y al llenar la boleta.



Será imprescindible desplegar una **campaña de información, orientación y sensibilización** para que la población asuma una actitud propositiva, teniendo conciencia y claridad sobre la importancia del censo; así como proporcionar la información fidedigna, manteniéndose en el lugar habitual de su residencia, para que las futuras políticas públicas –por ejemplo sobre salud, educación, saneamiento básico o desarrollo productivo– estén focalizadas en los lugares precisos.

4

El día del **operativo censal** también necesitará del comportamiento responsable de la población para recibir a los empadronadores, quienes deberán tener garantizadas las condiciones para su desplazamiento, el material completo y todos los detalles logísticos para el cumplimiento de su misión.

5

Que el país tenga información precisa sobre las características de la población y sus condiciones de vida depende de un correcto **procesamiento de datos**, bajo el lineamiento de la ética, la transparencia y la independencia política, cumpliendo estándares técnicos para el efecto.

6

La responsabilidad también se asienta en una oportuna **presentación de resultados**, de los que dependerán las próximas políticas, planes y proyectos, no solo a ser definidas por las instancias públicas, sino también privadas.

7

Para cada una de estas etapas, existen instituciones académicas –como las universidades– y otras instancias de sociedad civil con amplio conocimiento y capacidades para aportar en cada tarea.

Tanto la voluntad política expresada por el Gobierno, como la corresponsabilidad ciudadana, deben precautelar la independencia y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), reconociéndola como la entidad técnica especializada en estos estudios.

### ¿QUÉ SE DEFINIRÁ CON EL CENSO?

La información de esa fotografía social y demográfica será la base fundamental para ajustar políticas de salud y educación, tan urgentes en el contexto de las secuelas por la pandemia del coronavirus. Permitirá establecer políticas de vivienda y atender las demandas de tantas familias migrantes, cada vez más concentradas en las ciudades.

Dejará claro dónde debe intensificarse el saneamiento básico, el acceso al agua y otras necesidades para mejorar la calidad de vida de las familias, tanto en comunidades como en áreas urbanas.

Generará información sobre la situación del empleo, formal e informal, dará pautas sobre dónde se

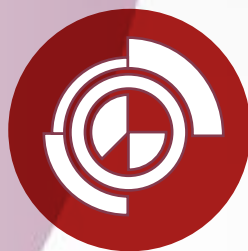
encuentra la población más vulnerable, los pobres, ancianos, niños o personas con discapacidad; así como temas de género y de los pueblos y territorios indígena-originario campesinos.

En general, proporcionará datos orientadores para focalizar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno y contribuirá a optimizar la inversión y la prioridad de las políticas de cuidado en el país.

También es altamente relevante para una adecuada redistribución de los recursos públicos por criterio poblacional. Permitirá definir cuánto le corresponde a un departamento o a un municipio por coparticipación tributaria.

En lo político institucional, contribuirá a definir la distribución de los escaños parlamentarios, principalmente en la Cámara de Diputados. Más aún, permitirá ajustar el padrón electoral, tema tan sensible en pasadas elecciones, aspecto que resulta urgente actualizar, en un marco de total transparencia, y antes de los comicios de 2025.

El Censo es la única fuente de datos e información con estas características; por tanto, de importancia para el conjunto del país, para cada departamento y cada municipio. No es un asunto gubernamental, sino estatal y de corresponsabilidad ciudadana.



# ALIANZA OCD:

## DE LA OBSERVACIÓN A PROCESOS ELECTORALES A LA VIGILANCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

EL OBSERVATORIO DE LA OCD, EN COORDINACIÓN CON SEIS UNIVERSIDADES DEL SISTEMA PÚBLICO Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA CONFORMARÁN EQUIPOS DE MONITORES EN TODO EL PAÍS

La alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia nació como una iniciativa de sociedad civil para hacer seguimiento a los últimos procesos electorales, la Elección General de 2020 y de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales de 2021. Tras este ciclo electoral, la organización orientará su labor de vigilancia —a través del Observatorio— en tres ejes temáticos: institucionalidad democrática, reformas al sistema electoral y desarrollo del Censo de Población y Vivienda.

Desde 2014, cuando se realizaron las elecciones generales, el país vivió procesos electorales prácticamente cada año; el 2015, elecciones de gobiernos departamentales y municipales; el 2016 se realizó el referéndum constitucional sobre la reelección presidencial; el 2017 se eligió a las máximas autoridades judiciales; el 2019 fueron los comicios nacionales anulados; el 2020, se eligió al presidente, vicepresidente y asambleístas; y el 2021, elecciones de gobiernos departamentales y municipales.

Tras concluir esta etapa maratónica de acudir a las urnas para elegir autoridades, el país está frente a desafíos vinculados al fortalecimiento de sus

instituciones democráticas, a dotar de un sistema electoral robusto que promueva procesos transparentes y en igualdad de condiciones, y un censo que visibilice todo el proceso que representa levantar una “fotografía” del país.

El Observatorio de la OCD se enfocará en la institucionalidad democrática en Bolivia con el seguimiento sobre el ejercicio de los derechos políticos, la exclusión política por la condición de género y por la condición cultural, la participación electoral y la integración de los ciudadanos en la definición y gestión del Estado.

Con relación a las reformas al sistema electoral, se hará vigilancia a las propuestas y el debate que se genere en torno a los estatutos de las organizaciones políticas, competencias jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la redistribución de escaños, difusión de encuestas, inhabilitación de candidatos, cómputo electoral, padrón electoral, procedimientos técnico-electorales y financiamiento partidario.

Respecto al Censo, instituciones de sociedad civil solicitaron que no se postergue, por ser un instrumento indispensable para planifi-





car el desarrollo en todos los niveles del Estado. El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4546, a través del cual fijó para el 16 de noviembre de 2022 la fecha para el operativo censal.

Por esa razón, el Observatorio de la OCD pondrá sus esfuerzos en el seguimiento al acceso a la información sobre las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Órgano Ejecutivo, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la sociedad civil sobre todo el proceso que implica su realización.

El objetivo del Observatorio es monitorear, registrar, sistematizar y difundir información que promueva una ciudadanía activa en los asuntos públicos, la transparencia y acceso a la información, y la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de las personas.

En coordinación con seis universidades del sistema público: Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, la Universidad Amazónica

de Pando, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y una privada, la Universidad Católica Boliviana-La Paz, conformarán equipos de monitores que previamente se capacitarán en estas tres grandes líneas de trabajo para mantener involucrada a la ciudadanía.

Los equipos estarán conformados por cinco estudiantes de diferentes carreras, además de un docente encargado y de una autoridad universitaria. El monitoreo se realizará a medios de comunicación que regularmente emitirán informes, los que servirán para generar información y análisis.

El análisis sobre los resultados del monitoreo a los tres ejes temáticos serán realizados por las instituciones de la Ruta de la Democracia, con el objetivo de cualificar la información.

Por otra parte, el Observatorio tiene pensado encarar la realización de una encuesta virtual de percepción ciudadana sobre las reformas electorales, institucionalidad democrática y sobre el Censo; además de promover mesas técnicas de debate y análisis que orienten a la ciudadanía sobre estos temas.

El Observatorio de la Alianza OCD es una iniciativa del Programa de Derechos Humanos y Democracia de Fundación Jubileo, agrupa a instituciones de la Ruta de la Democracia, a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y a las universidades, entidades que ya han cumplido una labor fundamental en el voto informado y en el proceso de observación electoral de los comicios que se desarrollaron en el país.

Institución	Universidades con equipos de monitores	Temas de monitoreo
Observatorio de la Alianza OCD	Universidad Mayor de San Andrés	Institucionalidad democrática
	Universidad Mayor de San Simón	
	Universidad Técnica de Oruro	
	Universidad Amazónica de Pando	Reformas al sistema electoral
	Universidad Mayor Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca	Censo de Población y Vivienda
	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno	
	Universidad Católica Boliviana (Regional La Paz)	



# DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN

## DESAFÍAN A RESOLVER DEFICIENCIAS, CAMBIAR CONTENIDOS Y ASIGNAR NUEVOS ROLES A DOCENTES

Las deficiencias en infraestructura, equipamiento y pedagogía del sistema educativo boliviano, las limitaciones en el acceso a internet, junto a las carencias económicas de las familias bolivianas, en un contexto de pandemia, provocaron la ampliación de las desigualdades sociales.

Esta realidad se hizo más visible durante la crisis sanitaria global, pero podría convertirse en una oportunidad para repensar la educación en el país. El desafío educativo pasa desde actualizar los contenidos, hacerlos más prácticos y útiles para la vida, así como reformular el rol del docente para que se convierta en un gestor del conocimiento, para potenciar las habilidades sociales y cognitivas del estudiante.

El desafío fue planteado por Nestor Ariñez, filósofo y educador de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, en el seminario "Presente y futuro para los jóvenes en tiempos de crisis – Desafíos y oportunidades para la sociedad boliviana en educación", organizado por la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo (ESFORDD).

Una de las deficiencias señaladas por Ariñez es la infraestructura no apta para un retorno a clases presenciales. El sistema sanitario en las unidades educativas por falta de agua en algunos establecimientos es un problema a resolver. Algunas aulas son espacios muy reducidos para la cantidad de estudiantes, con poca ventilación y, en algunos casos, con poca iluminación. "He conocido escuelas, aquí en la ciudad de Cochabamba, que tienen aulas debajo de las gradas".

Otras deficiencias son el mobiliario, equipamiento en bibliotecas, laboratorios y acceso a tecnología.

Ariñez apunta que a esto se suma el funcionamiento de hasta tres turnos en las unidades educativas. En estas condiciones, ¿cómo se pueden generar medidas de bioseguridad para clases presenciales?

Respecto a la calidad educativa, las prácticas pedagógicas aún están centradas en el docente, lo que impulsa una educación bancaria y memorística (repetitiva) a través de la transmisión del conocimiento, además de una modalidad de aula dividida en filas para mantener el control de la clase.

Este sistema no considera que la información a compartir ya se encuentra desplegada de manera diversa, profunda e interactiva en el ciberespacio. En este contexto, la labor docente debería superar la mera transmisión y debería virar hacia una gestión del conocimiento, lo que supone dialogar con la información y contenidos que están fuera del aula para acompañar a los estudiantes en esa exploración, propone Ariñez.

Antes de la crisis sanitaria se creía que el acceso a internet estaba democratizando la información. "Sin



embargo, lo que nos reveló la pandemia es que en Bolivia no todos tenemos acceso a internet ni siquiera en las ciudades... La democratización de la educación a través de la tecnología hoy sigue siendo una promesa".

Además del acceso a la red está el factor de ¿con qué ingresamos a internet? Familias con tres o cuatro niños que tienen que pasar "clases virtuales" en casa tienen un solo dispositivo celular. Más crítico aún es preguntarse cuántas familias tienen acceso a una computadora para uso estudiantil. Estas son otras evidencias de la pobreza en el país.

Por su parte, Marcelo Durán, comunicador y docente de la UCB en Cochabamba, sostiene que se puso en evidencia un error que se cometió desde antes de la pandemia: el haber prohibido el uso de internet y celulares en las aulas. "Sobre todo en espacios educativos, todo está prohibido. Está prohibido llevar un teléfono, está prohibido incorporar dispositivos tecnológicos, usar una calculadora. Todo está prohibido, porque dudo de ti, sospecho de ti. Tú tienes que saber todo de memoria y recitarme como loro, como en la Edad Media".

La cuarentena forzó a pasar a una educación virtual que antes se prohibía, y la adaptación fue a marcha forzada, sin aprendizaje ni práctica previa.

"Empezamos a meter clases de tres horas a la pantalla, a repetir lo que hacen los docentes y meterlos a una computadora. Te pago tres horas, quiero las mismas tres horas, pero ahora frente a una pantalla. Entonces, es una especie de Frankenstein donde hemos sacado algunas cosas de la educación presencial y las hemos metido en lo virtual. Eso nos está pasando la cuenta". ¿Cuál es el costo de esa educación virtual?, el que los estudiantes hayan aprendido "menos de lo que aprendían en aula".

Durán afirma que no es necesario que el docente y el plantel educativo se conviertan en creadores de contenido, porque este ya se encuentra en la red. Es necesario explorar en un diálogo con los propios estudiantes cuáles son los nichos de aprendizaje de preferencia para ellos; y así dejar de asumirse como dueños del método, el contenido y el medio.

"Uno se imagina la clase desde la mirada institucionalizada: cuatro paredes. Pero si nos preguntamos ¿cuándo, dónde, cómo, con quién y con qué aprendemos? vamos a tener algunas pistas de cómo abordar el tema digital; no como un fin, sino como un medio, como un facilitador en este proceso".

Bajo esa mirada, se puede cambiar el esquema de un/a estudiante que consume conocimientos y saltar cualitati-



vamente al estudiante productor de conocimientos. "Si yo les digo a mis alumnos que en vez de dar un examen de verdadero o falso de 100 preguntas realicen un video y que lo suban a Facebook, a Youtube o a Tik Tok; si les digo que saquen fotos de los apuntes o que hagan un podcast de tal tema o un documento interactivo para un blog, de esta forma, y bajo los parámetros actuales de relacionamiento social de la juventud que comparte, estamos impulsando una nueva forma de aprendizaje, más cerca del aprender haciendo".

Sin embargo, esto que aparentemente es sencillo debe romper estructuras mentales educativas, apegadas al horario, la regla, la normativa o el formato. El educador propone desaprender las malas prácticas burocráticas como primer paso para renovar la educación en la postpandemia. "Hoy en día, la discusión no es presencial versus virtual. Hoy día queremos hacer experiencial y personalizada, con toques digitales, toques virtuales, toques tecnológicos, toques presenciales, si se puede; pero que genere una experiencia positiva en los estudiantes".

"La educación tiene que enfocarse en ejes distintos, por ejemplo: interconectada, es decir, que mi aprendizaje con otro docente lo pueda compartir, lo pueda colaborar; multiplataforma, es decir, que si yo doy matemáticas en La Paz y conozco un docente en Santa Cruz que está haciendo lo mismo, compartamos ese recurso por plataformas; que sea, por supuesto (una clase) vivencial, lúdica, ramificada, digital y valórica".

Durán sostiene que no hay que quedarse solo con lo malo de la cuarentena, sino también recuperar lo bueno y rearmar nuevos procesos educativos, poniendo énfasis en cuál es el rol de los docentes hoy: liberar y despertar el potencial creativo de los estudiantes, para que esos frutos se reflejen a futuro en Bolivia.

# MODELO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MCC 2021

"AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO"



## Jóvenes líderes DEBATEN SOBRE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

en la política internacional

La política internacional, los compromisos y las posiciones de los países sobre medio ambiente y cambio climático son los temas de debate entre jóvenes líderes de las regiones metropolitanas de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, con la metodología de simulación Modelo ONU de Cambio Climático.

La recreación de espacios de negociación internacional posibilita que los jóvenes vivencien la complejidad de las discusiones y acuerdos internacionales, así como las que realizan las delegaciones oficiales de los países en la Conferencia de Partes (COP), además de fortalecer los procesos de sensibilización y compromiso con la problemática del cambio climático.

El grupo del área metropolitana de Cochabamba se reunió el 15 y 16 de julio, el grupo de La Paz se congregó el 5 y 6 de agosto y la simulación de Santa Cruz se realizará en septiembre. Estos eventos son parte del proceso de formación del proyecto "Acción Ambiental Metropolitana", implementado por Fundación Jubileo y Hanns Seidel Stiftung, con el financiamiento de la Unión Europea.

Los encuentros de simulación académica: Modelo de Cambio Climático – MCC 2021 ponen énfasis en el problema del agua y el cambio climático. La metodología asigna roles a los jóvenes para representar a algún país específico, lo que demanda a

ARTURO CASTRILLO  
PBACC

Estamos generando un cambio, sobre todo porque este país nos ha sido legado. El cuidado del medio ambiente y de toda especie viva es responsabilidad nuestra.



los participantes a investigar sobre las posiciones e intereses de los diferentes países.

Desde las instituciones que implementan el proyecto se tiene la experiencia de desarrollo de simulaciones académicas desde el año 2014, tanto con jóvenes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia; así como la realización de Conferencias de Jóvenes (simulaciones de modelo parlamentario), para el abordaje de temas como el empleo joven, el agua en regiones metropolitanas, amazonia y cambio climático.

La continuidad de estas acciones permite amplificar espacios de mayor capacitación juvenil y su posterior compromiso en la construcción de redes colaborativas. La red de jóvenes líderes ambientales denominada Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBACC) es una aliada de este esfuerzo común, la que surgió de exbecarios de las simulaciones del MCC de 2014 y 2015, a la que se suman, cada año, más personas comprometidas.

Estas acciones de sensibilización fortalecen la intervención del proyecto en los municipios de cobertura de las tres regiones metropolitanas para desarrollar capacidades de oratoria y negociación.

Luego de este ciclo se realizará un evento de MCC nacional con las representaciones más destacadas de cada región.



JHOSELYNE TAMBO  
RELIDD

Nos caracteriza a la Relidd, el poder realizar proyectos de investigación con base en los cuales se hace incidencia política, encontrando problemas concretos de nuestra sociedad.





Las 10 bodegas más importantes de Tarija, entre grandes, medianas y pequeñas, producen cerca de 7 millones de litros de vino por año.

En Tarija, 37 bodegas de vinos y singanis vinculan a 2.800 familias en esta actividad productiva. Este rubro genera 11.000 empleos directos e indirectos.

Pese a la producción de calidad, Bolivia no figura entre los productores destacados de vino en el mundo. Italia, Francia y España (52% entre los tres) están entre los productores más importantes.

En los índices de competitividad, Bolivia ocupa el puesto 107 entre 141 países.

El documento pretende aportar al debate nacional y especialmente departamental sobre la necesidad de desarrollar sectores

con potencialidad económica utilizando la renta hidrocarburífera como un mecanismo de financiamiento.

En este contexto, inicia con una conceptualización de la competitividad, las mediciones que existen al respecto, para posteriormente enfocarse en las potencialidades económicas en el departamento de Tarija, reconocido por su condición de principal departamento productor de hidrocarburos y receptor de la renta que genera la explotación de este recurso, deteniéndose en el clúster de la uva (grupo de empresas interrelacionadas) que involucra a los sectores de vino y singanis, jamones, quesos, berries y turismo en esa región del país. Finalmente, visibiliza aspectos relacionados con la competitividad que deben ser resueltos para poder alcanzar este objetivo.



## TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

Las Transferencias Público-Privadas (TPP) son un mecanismo para impulsar la producción y el desarrollo, éstas están autorizadas por la normativa, principalmente desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías del año 2010.

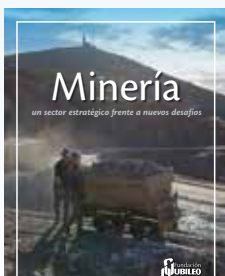
Si bien las Transferencias Público-Privadas se pueden utilizar para diferentes fines, el énfasis que le da la normativa, y el enfoque que plantea Fundación Jubileo, está orientado a transferencias para emprendimientos productivos.

Estos materiales están principalmente dirigidos a organizaciones productivas. Explican qué son las TPP, su finalidad y los procedimientos que se deben seguir, para gestionar financiamiento ante los gobiernos departamentales y municipales. También se incluye una guía dirigida a autoridades de gobernaciones y municipios para que tengan a su alcance las normativas y ejemplos de aplicación para facilitar estas transferencias a emprendedores productivos.



## MINERÍA, UN SECTOR ESTRATÉGICO FRENTE A NUEVOS DESAFÍOS

Fundación Jubileo promueve el debate plural en diversos ámbitos. Este documento recoge los aportes de expertos de la Mesa Redonda de Minería. Se trata de trabajadores, ex autoridades y analistas que periódicamente se sientan a discutir y a proponer cómo podría mejorar el sector y el país en su conjunto.



### Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez V.

### Coordinador General:

Waldo Gómez R.

### Responsable de edición:

Jorge Jiménez J.

### Dirección:

Calle Quintín Barrios N° 768

Sopocachi, La Paz - Bolivia

Tel: (591-2) 2125177

2154641

Publicación con apoyo de

KZE-Misereor Alemania

D.L. 4-3-61-12

### Equipo técnico:

René Martínez C.  
Raúl Velásquez G.  
Herbert Irahola F.  
Héctor Córdova E.  
Sandra Sánchez C.  
Willy Llanque  
Alejandro Carvajal  
Sandra Verduguez  
Nancy Vacaflor  
Cecilia Rocabado C.  
Ima Aillón V.  
Muriel Pérez O.

### Administración:

Mirían Clavijo  
Jhovanna Machicado  
Teresa Pérez  
Bladimir Herrera  
Yensi Borrás



@JubileoBolivia



Fundación Jubileo



Fundación Jubileo



@fundacionjubileo

[fundajub@jubileobolivia.org.bo](mailto:fundajub@jubileobolivia.org.bo)

[www.jubileobolivia.org.bo](http://www.jubileobolivia.org.bo)